

## MODESTO SEARA VÁZQUEZ

Rector de las Universidades Estatales del Estado de Oaxaca (Universidad Tecnológica de la Mixteca, Universidad del Mar, Universidad del Istmo, Universidad del Papaloapan, Universidad de la Sierra Sur, Universidad de la Sierra Juárez, Universidad de la Cañada), Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Catedrático de Derecho Internacional Público por oposición en la Universidad Nacional de México, Catedrático de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jefe fundador de la División de Estudios Superiores y Director fundador del Centro de Relaciones Internacionales de la FCFPS de la UNAM, ex Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Presidente de Honor de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Profesor Invitado, con cursos, cursillos o conferencias, en las Universidades de Londres, Berlín (Freie Universität), Leipzig, Rostock, Tel Aviv, Complutense de Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña, Granada, Alicante, Lleida, País Vasco, Alcalá de Henares, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, La Rábida, Santo Domingo, Panamá, San Salvador (U. Nacional), Venezuela (Universidad Central), Bogotá (Universidad Nacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Academia Militar), Guatemala, UCLA, Stanford, Lincoln (San Francisco), Pittsburg, Duquesne, George Washington (Washington, DC), Arizona State U., Kansas (Lawrence), Ohio State University, Cornell University (New York), University of Southern California, San Diego State College. Miembro de numerosas asociaciones académicas.

# DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

VIGÉSIMASEGUNDA EDICIÓN  
CORREGIDA Y AUMENTADA



EDITORIAL PORRÚA  
AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 15  
MÉXICO, 2005

un gran número de aviones, de los aliados y del Eje, que habían violado su espacio aéreo durante la segunda guerra mundial.

Del mismo modo, los beligerantes pueden prohibir a los aviones de los Estados neutrales el vuelo por determinadas zonas, a condición de que les avisen previamente, y en todo caso, pueden impedirles el vuelo por su propio espacio aéreo.

Los Estados beligerantes pueden ejercer igual que en la guerra marítima, el derecho de presa sobre los objetos que transportaban los aviones neutrales en las condiciones que hemos señalado para las mercancías en el mar.

## 7. LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL.

### 7.1. Los tribunales militares internacionales.

7.1.1. *Antecedentes.* La constitución de tribunales para juzgar a los dirigentes enemigos vencidos es algo relativamente reciente. Desde los comienzos de la historia, los vencidos quedaban a la merced de los vencedores, que hacían con ellos lo que les venía en gana, sin necesidad de otro argumento que el de la fuerza. En su expresión más significativa ahí está el hecho del jefe celta Brennus arrojando su espada en la balanza para exigir del romano Quintus Sulpicius más oro, y respondiendo a las quejas con su famoso "¡Vae Victis!" (¡Ay de los vencidos!). El siglo XIX desarrolló una serie de lazos curiosos entre las clases dirigentes de los países enemigos, que excluían del castigo a los principales responsables de los conflictos, y a sus subordinados directos también, con el argumento de la obediencia debida.

En el caso de Napoleón Bonaparte, la alianza vencedora se limitó a desterrarlo, o confinarlo, primero a la isla de Elba y después de la batalla de Waterloo, a la de Santa Elena, sin pensar en juicio alguno.

Fue con la Primera Guerra Mundial cuando surgió la idea de castigar a quienes se suponía culpables de haber desatado el conflicto bélico, y al arrojar la responsabilidad de la guerra así como la violación de normas sobre la conducción de la guerra (Convención y Declaraciones de la Haya y Convención de Ginebra) sobre Alemania, se decidió (en la Parte VII del Tratado de Versalles) crear un tribunal, con miembros designados por las cinco principales potencias, para juzgar al Kaiser Guillermo II, acusándole de "una ofensa suprema contra la ética internacional y la santidad de los tratados". Entre los aliados la idea suscitó dudas, particularmente por parte de los Estados Unidos y Japón, pero finalmente el juicio

no se llevó a cabo porque Holanda se negó a entregar al Kaiser que se había refugiado en aquel país. Tampoco se constituyeron otros tribunales que deberían de juzgar a los culpables de violaciones de las leyes de guerra y que el gobierno alemán habría de entregar a los aliados.

7.1.2. *El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg.* Las condiciones particularmente terribles en que se había desarrollado la segunda guerra mundial, principalmente por parte de las potencias del Eje (deportaciones en masa, exterminación sistemática de los judíos, los campos de concentración, la violación constante de las leyes de guerra), movieron a los aliados a tomar la posición de que era necesario crear una institución internacional, una corte de justicia, en que los responsables directos de esos crímenes fuesen juzgados. Ya desde la declaración del 10. de noviembre de 1943, publicada en Moscú, habían hecho saber su determinación de proceder en ese sentido.

Hay varias declaraciones anteriores, que tienen menos valor, pero el TMI fue creado por el acuerdo del 8 de agosto de 1945 y su anexo el Estatuto del Tribunal Militar Internacional, con las normas relativas a su organización, competencia y procedimiento.

El tribunal estaba compuesto de cuatro jueces, con sus respectivos suplentes, y fueron designados por Francia, Estados Unidos, Rusia e Inglaterra.

A los acusados, quince personas civiles y seis militares y siete organizaciones calificadas de criminales, se les otorgó la garantía de defensa, pudiendo designar personalmente a sus abogados, y presentar todas las pruebas que considerasen conveniente poner en conocimiento del tribunal.

Se reprochaba al Tribunal el actuar en violación del principio "nullum crimen, nulla poena sine lege", y de ahí que tratara siempre de apoyar sus decisiones en normas preexistentes, fundamentalmente tratados que habían sido violados como resultado de la acción directa de los acusados: Tratado Briand-Kellog de 1928, que prohibía la guerra como instrumento de política nacional; Reglas de la Haya, Convención de Ginebra, etc.

El Art. 26 del Estatuto, señalaba que:

"la decisión del Tribunal relativa a la culpabilidad o la inocencia de cualquier acusado deberá ser motivada y será definitiva y no susceptible de revisión."

El Tribunal dictó doce penas de muerte en la horca, tres cadenas perpetuas, 4 penas de prisión de diez a veinte años, y tres absoluciones. Una de las sentencias de muerte (Martin Bornmann) fue

en ausencia, dos se suicidaron (Göring y Ley), otro fue declarado no apto por razones médicas (Gustav Krupp) para someterse a juicio y uno de los ahorcados (el general Jodl) en 1953 fue eximido póstumamente de todos los cargos por un tribunal alemán

7.1.3. *El Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente (Tribunal de Tokio)*. Fue creado el 19 de Enero de 1946 por el Mando Supremo de las Potencias Aliadas; de hecho por el general norteamericano Douglas Mac Arthur, aunque el documento lleve la firma de su Jefe de Estado Mayor y otro militar (B.M. Ficht). Se adoptó también, el 25 de abril de 1946, el Reglamento, para las normas de procedimiento. Este Tribunal siguió los lineamientos del de Nuremberg y en él se juzgaron a los principales dirigentes japoneses acusados de crímenes de guerra, que comprendían las mismas tres categorías consideradas en Nuremberg, más una adicional: conspiración para cometer esos crímenes. Siete de los acusados fueron condenados a muerte, dieciseis a prisión perpetua y dos a penas de prisión. Sesión del 3 de mayo de 1946 al 12 de noviembre de 1948.

Después se celebrarían doce juicios más, en tribunales militares norteamericanos, constituidos por tres jueces. Más de novecientas personas fueran condenadas a muerte, fundamentalmente por actos perpetrados en Filipinas.

7.2. *Los delitos internacionales*.— Aunque comúnmente se habla de crímenes de guerra como un concepto amplio que abarca los diferentes tipos de crímenes internacionales, en realidad cabe hacer distinción entre ellos. El Art.6 del Estatuto establece una triple clasificación y define perfectamente las diversas clases:

1) Crímenes contra la paz, es decir, la dirección, la preparación, el desencadenamiento o la prosecución de una guerra de agresión, en violación de tratados, seguridad o acuerdos internacionales, o la participación en un plan concertado o en un complot para el cumplimiento de cualquiera de los actos que preceden.

2) Los crímenes de guerra, es decir las violaciones de las leyes y costumbres de guerra.

3) Los crímenes contra la Humanidad: es decir, el asesinato, el exterminio, la reducción a la esclavitud, la deportación y cualquier otro acto inhumano cometido contra cualquier población civil, antes o durante la guerra; o bien las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos cometidos como consecuencia de cualquier crimen que entre en la competencia del tribunal o relacionado con

ella, hayan constituido o no esas persecuciones una violación del derecho interno del país en que fueron perpetradas.

En relación con los crímenes de guerra debemos mencionar dos instrumentos convencionales importantes: la "Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio", en vigor desde el 12 de enero de 1951; y la Convención de 1968, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra.

7.3. *El Tribunal Penal Internacional*. Con el fin de no permitir que queden impunes los crímenes que se comenten contra la humanidad, se decidió establecer un Tribunal Penal Internacional de carácter permanente, y la Comisión preparatoria creada a ese efecto, concluyó la elaboración del proyecto de Estatuto, el 3 de abril de 1998, aprobando un documento, discutido en una Conferencia especial que se celebró en Roma, del 15 de junio al 17 de julio de 1998. Entró en vigor el 1 de julio del 2002, pero a mediados del 2005, entre los 92 países que formaban parte de ese sistema convencional, no estaban Estados Unidos, Rusia ni China. México lo ratificó en 2005.

7.4. *El Tribunal Penal Internacional para los Territorios de la Antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda*. La desintegración de Yugoslavia a comienzos de la década de 1990 creó las condiciones para una violenta confrontación nacionalista y étnica, durante la cual se cometieron innumerables crímenes en violación de las reglas del derecho internacional y de las normas más elementales de convivencia, situación que movió al Consejo de Seguridad de la ONU a establecer, el 25 de mayo de 1993, un tribunal penal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya.

Por razones similares, el Consejo de Seguridad también decidió crear el 8 de noviembre de 1994, otro tribunal penal internacional para castigar los crímenes cometidos en el territorio de Ruanda y en los territorios de los países vecinos, por ciudadanos de Ruanda, durante el año de 1994.

Ambos tribunales están constituidos por once jueces y su sede se encuentra en La Haya.

7.5. *El Tribunal especial para Sierra Leona*.— El 16 de enero del 2002 por acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Sierra Leona se estableció un tribunal para castigar los crímenes cometidos a partir del 30 de noviembre de 1996, durante la guerra civil que asoló a ese país. Este tribunal es distinto de los otros, en el

sentido de que fue creado por acuerdo con el gobierno del país, aplicará tanto el derecho internacional humanitario como el derecho de Liberia, entre sus jueces (que son ocho) también hay liberianos (tres) y se estableció en la capital del propio país, Freetown. El Tribunal está compuesto de una Cámara de primera instancia, de tres jueces y una Cámara de apelación, de cinco jueces.

#### 7.6 *Concepto de indemnización de guerra y de las reparaciones.*—

La derrota de un Estado en una guerra, traía como consecuencia que en los tratados de paz se le impusiera el pago de una determinada cantidad, cuyo monto quedaba a discreción del vencedor.

El carácter de esa imposición ha recibido varias interpretaciones y en ocasiones se presentaba como una simple indemnización por los daños sufridos por el vencedor; en el fondo era una verdadera penalización por la pérdida de la guerra. La institución sufrió sin embargo cierta evolución y hoy no se presenta ya, de acuerdo con la experiencia iniciada en el período posterior a la primera guerra mundial y completada al terminarse la segunda, como una indemnización cuyo carácter penal era evidente. El concepto actual aparece expresado claramente en el nombre con que se designa: reparaciones. Se trata de que el vencedor sea indemnizado de forma que los efectos de la guerra sufrida puedan disminuirse. En realidad, las reparaciones no cubren nunca el monto total de las pérdidas ocasionadas en una guerra, y el vencedor se limita a reclamar el pago de sumas muy inferiores. A veces, las reparaciones no se presentan en forma de pago monetario, sino en la entrega de mercancías o de equipo industrial, como fue el caso respecto a Alemania, donde los aliados desmantelaron muchas fábricas para resarcirse de las pérdidas sufridas.

7.7. *El terrorismo internacional.*— El terrorismo como arma política no es nada nuevo en la historia de la humanidad; sin embargo, en los últimos tiempos, las condiciones sociales han propiciado un resurgir de los actos de violencia individuales y de los colectivos de carácter limitado, tendientes a crear un clima de inseguridad o que tienen el carácter de represalias. Como razones particularmente favorecedoras de esta situación, deben citarse los regímenes represivos que se han instaurado en muchos lugares del mundo y la eficacia de los aparatos policíacos, que impiden la acción política tradicional, pacífica o armada, y no dejan más camino que la violencia desesperada, a menudo ciega y con frecuencia inútil o contraproducente, y no raras veces simple provocación del poder para justificar un mayor endurecimiento.

Si a estas condiciones nacionales se añade la creciente interrelación de los distintos países, podrá comprenderse con qué facilidad el problema del terrorismo trasciende las fronteras para convertirse en un problema internacional, al que deben buscarse soluciones internacionales, como las únicas realmente eficaces en muchos casos. Otras veces, las medidas que el Derecho internacional ofrece no son soluciones reales, que sólo pueden encontrarse en la eliminación de las injusticias y de las situaciones conflictivas que empujan a los actos insensatos del terrorismo indiscriminado.

Con el concepto de terrorismo internacional se cubren actos de naturaleza diferentes, que ya empiezan a recibir un tratamiento distinto. Por ejemplo, en el seno de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional ha estudiado un proyecto de convención sobre la prevención y castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente protegidas, proyecto que fue aprobado por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1973 [Res. 3166 (XXVIII)]. En él se castigan los delitos cometidos contra las personas mencionadas, obligándose las partes contratantes a adoptar las medidas necesarias para ese fin.

Bajo los auspicios de la desaparecida Sociedad de Naciones se había adoptado ya en Ginebra una Convención para la prevención y represión del terrorismo, el 16 de noviembre de 1937, por diecinueve países, pero no llegó nunca a entrar en vigor.

Los aviones dedicados al transporte de pasajeros fueron durante algunos años, el objetivo preferente en los actos de terrorismo internacional, debido a la espectacularidad de tales actos, que atraen la atención mundial, y también a causa de la vulnerabilidad de ese medio de comunicación. Era natural entonces que los países orientaran sus mayores esfuerzos a la adopción de medidas tendientes a evitarlos. Al respecto hay que mencionar los siguientes instrumentos internacionales más importantes:

a) La Convención de Tokio sobre delitos cometidos a bordo de aeronaves, firmada el 14 de septiembre de 1963, y en vigor desde el 4 de diciembre de 1969. Otorga competencia, respecto a delitos cometidos a bordo, al país cuya nacionalidad ostente la aeronave; además, tales delitos serán considerados como base de extradición.

b) La Convención para la supresión del apoderamiento ilícito de aeronaves, aprobada en La Haya el 16 de diciembre de 1970, y vigente a partir del 14 de octubre de 1971. Trata de coordinar la acción de los Estados partes en el convenio, con el fin de impedir o reprimir los actos de apoderamiento de aeronaves, y especialmente obliga a las partes a tomar medidas tendientes a establecer su juris-

dicción sobre actos cometidos contra tripulación de pasajeros de un avión cuando el aparato esté registrado en ese país, o aterrice en él, o tenga algún lazo con dicho país.

c) La Convención para la represión de los delitos contra la seguridad de la Aviación Civil, firmada en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y que entró en vigor el 14 de octubre siguientes. Bajo su alcance caen los actos de violencia cometidos contra personas o aeronaves en servicio, o que de algún modo interfiera en forma grave (destruyendo instalaciones relacionadas con la navegación aérea, difundiendo información falsa que pueda poner en peligro una aeronave, etc.), con el normal funcionamiento del transporte aéreo, y los Estados que han ratificado la Convención se comprometen a castigar con penas severas los delitos mencionados.

En 1978, el Consejo de Europa propició la conclusión de la Convención Europea para la supresión del terrorismo, que ya está en vigor, y de la que entre otros países forma parte España. Esta convención permite la extradición y castigo de los que cometan actos de terrorismo, que por ser normalmente motivados por razones políticas, escaparían a la obligación de conceder la extradición.

Una Convención contra la toma de rehenes fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, y quedó abierta a la firma de los Estados a partir del 18 del mismo mes. De acuerdo con esta convención, el Estado en cuyo territorio se encuentre el delincuente deberá someterlo a juicio, o extraditarlo. La extradición no procede si el Estado al que se la solicita tiene motivos para suponer que la solicitud se hizo para perseguir a una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad u opinión política. Tampoco se aplicará en los casos de conflicto armado, tal como lo definen en las Convenciones de Ginebra o sus Protocolos.

Más recientes son el Convenio para la marcación de explosivos plásticos, con fines de detección, del 1 de marzo de 1991, la Convención internacional para la supresión de los atentados terroristas cometidos con bombas, de 1997 y la Convención internacional para la supresión de la financiación del terrorismo, de 1999.

En el continente americano debe citarse, por último, la Convención interamericana contra el terrorismo, adoptada en Bridgetown (Barbados), el 3 de junio del 2002.

La urgente necesidad de actuar en el plano internacional contra el terrorismo, se puso de manifiesto de modo dramático con los terribles atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, del 11 de marzo del 2004 en Madrid, y del 7 de julio de 2005 en Londres.

## Disposiciones (Resoluciones de la AG de la ONU y Tratados) principales, relativas a la lucha contra el terrorismo

### A. Resoluciones de la Asamblea General de la ONU

A/RES/3034(XXVII); A/RES/31/102; A/RES/32/147; A/RES/34/145; A/RES/36/109; A/RES/38/130; A/RES/39/159; A/RES/40/61; A/RES/42/159; A/RES/46/51; A/RES/49/60; A/RES/48/122; A/RES/49/185; A/RES/50/53; A/RES/50/186; A/RES/51/210; A/RES/52/133; A/RES/52/165; A/RES/53/108; A/RES/54/109; A/RES/54/110; A/RES/55/164; A/RES/55/158; A/RES/56/1

### B. Acuerdos de carácter universal

*Convención sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves*, firmado en Tokio el 14 de septiembre de 1963 (Depositada ante el Secretario General de la OACI) En vigor desde el 4 de diciembre de 1969.

*Convención para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves*, firmada en La Haya el 16 de septiembre de 1970 (Depositada ante los Gobiernos del Reino Unido, los Estados Unidos y la Federación Rusa). En vigor desde el 14 de octubre de 1971.

*Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil*, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971 (Depositada ante los Gobiernos del Reino Unido, los Estados Unidos, y la Federación Rusa). En vigor desde el 26 de enero de 1973.

*Convenio sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos*, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. (Depositado ante el Secretario General de la ONU). En vigor desde el 20 de febrero de 1977.

*Convenio Internacional contra la Toma de Rehenes*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. (Depositado ante el Secretario General de la ONU). En vigor desde el 3 de junio de 1983.

*Convención sobre la protección física de Material Nuclear*, firmada en Viena el 3 de marzo de 1980 (Depositada ante el Director General del OIEA). En vigor desde el 8 de febrero de 1987.

*Protocolo para la represión de actos ilegales de violencia en los aeropuertos que prestan servicio a la aviación civil internacional*, suplementaria a la Convención para la represión de actos ilegales contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988 (Depositado ante los Gobiernos del Reino Unido, Federación Rusa y OACI). En vigor desde el 6 de agosto de 1989.

*Convención para la represión de actos ilegales con la seguridad de la navegación marítima*, hecha en Roma el 10 de marzo de 1988 (Depositada con el Secretario General la OMI). En vigor desde el 10. de marzo de 1992.

*Protocolo para la represión de actos ilegales cometidos contra la seguridad de las plataformas fijas situadas sobre la plataforma continental*; hecho en Roma el 10 de marzo de 1998 (Depositado ante el Secretario General de la OMI). En vigor desde el 1 de marzo de 1992.

*Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección*. Firmado en Montreal el 10. de marzo de 1991. (Depositado ante el Secretario General del ICAO). En vigor desde el 21 de junio de 1998.

*Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas*, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997. (Depositado ante el Secretario General de la ONU). En vigor desde el 23 de mayo del 2001.

*Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo*, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999. (Depositado ante el Secretario General de la ONU). En vigor desde el 20 de abril del 2002.

### C. Acuerdos de carácter regional

*Convención árabe sobre la supresión del terrorismo*, firmada en una reunión celebrada en la Secretaría General de la Liga Árabe, en El Cairo, el 22 de abril de 1998 (Depositada ante el Secretario General de la Liga Árabe). En vigor desde el 7 de mayo de 1999.

*Convención de la Organización de la Conferencia Islámica, sobre el combate al terrorismo internacional*, adoptada en Ougadougou, el 10. de julio de 1999 (Depositada ante el Secretario General de la OCI). En noviembre del 2002 no había entrado en vigor.

*Convención europea sobre la represión del terrorismo*, concluida en Estrasburgo, el 27 de enero de 1977. (Depositada ante el Secretario General del Consejo de Europa). En vigor desde el 4 de agosto de 1978.

*Convenio de la OAS para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional*, concertado en Washington, D.C. el 2 de febrero de 1971. (Depositado ante el Secretario General de la OAS). En vigor desde el 16 de octubre de 1973.

*Convención de la Organización de la Unidad Africana para la prevención y el combate del terrorismo*, adoptada en Argelia el 14 de

julio de 1999 (depositada ante el Secretario General de la OUA). En noviembre del 2002 no había entrado en vigor.

*Convención general de la Asociación del Sureste Asiático para la Cooperación Regional* (SAARC o South Asian Association for Regional Cooperation) *sobre la represión del terrorismo*, firmada en Katmandú el 4 de noviembre de 1987 (Depositada ante el Secretario General de la SAARC). En vigor desde el 22 de agosto de 1988.

*Tratado sobre la cooperación entre Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, para el combate al terrorismo*, firmada en Minsk el 4 de junio de 1999 (Depositada ante la Secretaría de la CEI). Entró en vigor, en aplicación del artículo 22.

## CASOS PRÁCTICOS

### 1. EL GOBIERNO DE RHODESIA ZIMBABWE Y LA LEGÍTIMA DEFENSA

#### 1.1. Los hechos

En Rhodesia (que luego adoptaría el actual nombre de Zimbabwe) un gobierno formado por la minoría blanca proclama unilateralmente la independencia, en violación de resoluciones de las Naciones Unidas y en contra de la voluntad del pueblo. Un amplio movimiento de guerrillas se propagó por diversas zonas del país, contando con bases y apoyo en los países limítrofes, que no ocultaban su aversión al gobierno de Salisbury. En ocasiones, las fuerzas rhodesianas atravesaron la frontera, en operaciones de castigo a supuestas bases guerrilleras en Zambia y Mozambique.

#### 1.2. Preguntas

a) ¿Pueden calificarse esas acciones como de legítima defensa? Si lo son ¿qué elementos permitirían darle ese calificativo? Si no lo son, ¿cómo se las podría denominar?

b) ¿Cambiaría el planteamiento si Rhodesia fuera miembro de un acuerdo internacional de legítima defensa? Explicar.

c) ¿Incorre en responsabilidad el país que permite en su territorio bandas armadas que actúan contra otros países? ¿Qué normas serían aplicables?

#### 1.3. Bibliografía

a) N.C.H. Dunbar, "Le concept de nécessité militaire dans le droit de la guerre", en "Contributions à l'étude des problèmes du désarmement", Bruselas, 1958.

b) Ian Brownlie "International Law and the Use of Force by States", Oxford, 1963.

c) C. Th. Esthatiades, "La définition de l'agression adoptée aux Nations Unies et la légitime défense", en "Revue Hellénique de Droit International", No.1-4, 1975.

## 2. LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA

### 2.1. Los hechos

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 26 de noviembre de 1968, una Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, para evitar que en virtud de la prescripción penal, quedaran sin castigar muchos criminales de guerra, de la II Guerra Mundial. La Convención fue sometida a la aprobación del Senado de México, que la rechazó (aunque la aprobó años más tarde).

### 2.2. Preguntas

a) ¿Podía el Senado aceptar la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de acuerdo con la Constitución mexicana?

b) ¿Qué razones jurídicas podrían encontrarse para explicar la negativa a ratificar este tratado, cuando fue formulada por el Senado de México?

c) Hacer una comparación entre los problemas planteados por su ratificación y los que planteara el establecimiento del Tribunal de Nuremberg.

### 2.3. Bibliografía

a) H. Donnedieu de Vabres, "Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international", en R.C.A.D.I., 1947, 70, 481.

b) Naciones Unidas, "Question of Punishment of War Criminal and of Persons Who Have Committed Crimes Against Humanity. Question of the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes Against Humanity", Nueva York, 1966.

c) Ph. Aziz, "Les criminels de guerre", París, 1974.

## 3. EL USO DE MERCENARIOS

### 3.1. Los hechos

El uso de mercenarios en la guerra es una práctica tan antigua como la humanidad; sin embargo en los años después de la segunda

guerra mundial ha revestido modalidades especiales, sobre todo como instrumento de apoyo de las potencias colonialistas o de regímenes tiránicos, lo que ha provocado una reconsideración de la actitud de los países. Con todo, el derecho internacional plantea muchas dudas, que es interesante razonar.

### 3.2. Preguntas

a) ¿Es ilegal el uso de mercenarios en una guerra internacional? ¿Y cuándo se usaron para mantener subyugadas a las colonias? ¿Qué normas internacionales contradecían? ¿Y en el momento actual?

b) ¿Qué tratamiento deben recibir, al punto de vista del derecho internacional, los mercenarios que intervengan con una de las facciones en una guerra civil?

c) ¿Qué valor tiene la hipotética motivación ideológica de un combatiente extranjero para darle o no el calificativo de mercenario? ¿Y el sueldo que reciba?

### 3.3. Bibliografía

a) D. Schindler, y J. Toman, "The Law of Armed Conflicts", Leyden, 1973.

b) Henry W. Van der Venter, "Mercenaries at Geneva", en A.J.I.L., octubre 1976, pp. 811-816.

c) Wilfred Burchett, y Derek Roebuck, "The Whores of War. Mercenaries Today", Londres, 1977.

d) H.C. Burmester, "The Recruitment and use of mercenaries in armed conflict", en A.J.I.L., enero 1978, pp. 37-56.